



Zona Zero

Tercera Época

Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad, S.A. de C.V.

seguridadydefensa.mx

Red social de Boletín Seguridad Estratégica para Empresarios: más de 130 mil seguidores directos en twitter a través de @carlosramirez

Resumen Ejecutivo

Efectividad lenta

El diseño, aprobación y aplicación de la estrategia nacional de seguridad pública del gobierno de López Obrador ha entrado en una zona de turbulencia; pero no por falta de objetivos o por ineficacia, sino porque su proceso de aprobación integral está pasando por el túnel oscuro del aumento de la delincuencia y disputas territoriales muy locales entre bandas del crimen organizado/desorganizado.

Entre la planeación estratégica y la implementación de decisiones existe una zona oscura que el gabinete de seguridad no ha podido llegar ni alumbrar desde fuera: la recomposición de bandas criminales, la atomización de grupos delincuenciales y sobre todo esa tierra de nadie entre el agotamiento y desmantelamiento de la estructura de seguridad anterior y la organización lenta y a retazos de la nueva.

A ello se agrega la peor parte de la estrategia: la necesidad de que gobernadores y alcaldes se comprometan con los planes y la desidia de esos dos niveles locales de gobierno que no quieren invertir en seguridad y que esperan que de manera mágica la Guardia Nacional llegue a poner orden. Los casos graves de Veracruz, Guanajuato, Quintana Roo y Michoacán tienen la falta de correspondencia local.

Lo malo de este *impasse* entre el plan y la práctica radica en el hecho de que las cifras de inseguridad, delincuencia y

homicidios potencian de manera negativa las percepciones sociales sobre inseguridad y convierten en tragedias sociales de pánico las matanzas entre bandas que sacrifican vidas civiles con impunidad. A ello contribuye también el triunfalismo de las autoridades federales que suele celebrar algunas victorias, pero guarda silencio ante las derrotas.

La estrategia gubernamental de seguridad debe darle mayor importancia a la implementación práctica en el corto plazo a algunas decisiones ya aprobadas y requiere de una estrategia de comunicación social para ir difundiendo la reestructuración de la fuerza de seguridad federal, porque todo se agota en las conferencias presidenciales matutinas y se pierde en la multitud de temas ahí desarrollados.

Pero la parte principal radica en la necesidad de que el gobierno federal ponga mayor presión en las autoridades estatales y municipales y depure con mayor profundidad y rapidez a las policías municipales que en buena parte están al servicio del crimen organizado. Las visitas presidenciales a entidades de la república se deterioran por los abucheos y nada se debate en público sobre la seguridad.

Sin una participación estatal y municipal, la eficacia federal en seguridad se reducirá a resultados parciales, frente a la violencia criminal creciente.

Venezuela 1: crisis de régimen
/ pág. 2

Venezuela 2: los límites del chavismo-madurismo
/ pág. 3

Análisis Estratégico

Acelerar operatividad

Rumbo al primer año real de gobierno --desde la victoria electoral del 1 de julio de 2018--, la estrategia lopezobradorista de seguridad se ha quedado como empantanada en la fase organizativa. En su libro *El soldado y el Estado*, el politólogo Samuel Huntington señala la importancia de encarar de manera simultánea las políticas operativa e institucional. Es decir, la planeación y la aplicación.

La Guardia Nacional salió después de muchos tropiezos al interior de la mayoría de Morena en las dos Cámaras y las leyes reglamentarias siguen en negociaciones. El problema radica en que la anterior estructura --la Policía Federal y la Gendarmería-- ya han sido desmanteladas, sus efectivos carecen de representatividad y el nuevo personal de la GN no tiene aún aprobación operativa. Por eso en Minatitlán aparecieron, después de la masacre del 19 de abril, aparecieron efectivos del ejército con el gafete de la Guardia.

La parte medular de la guardia, la que no se ve, sigue en el limbo: el sistema nacional de inteligencia o aparato de recopilación de información estratégica sobre la organización, refugios y complicidades de las organizaciones del crimen organizado/desorganizado. La Guardia ha quedado en la imagen pública como efectivos en las calles, sin mucha capacidad de operaciones de persecución y desmantelamiento activo de bandas criminales; pero un cuerpo de disuasión no resuelve la crisis de seguridad, porque la disputa por las plazas entre las diferentes organizaciones delincuenciales se realiza con violencia que siempre afecta a población civil inocente.

Si la intención del gobierno federal es tener todo el andamiaje legal de la seguridad aprobado en el Congreso, entonces su operación efectiva podría comenzar hacia el segundo semestre del año, pero con las cifras de violencia creciendo en todo el país. Y habría que esperar la dimensión real de la operatividad de la estrategia para saber si será sólo de disuasión en las calles o de operaciones de desmantelamiento en base a inteligencia. La preocupación de sectores sociales radica en la posibilidad de que los nuevos cuerpos de seguridad no entren a la confrontación de violencia por posibles acusaciones de abuso de fuerza, dejándole a los delincuentes un espacio de operación con impunidad.

El primer tropiezo de la Guardia ocurrió con las fuerzas estatales y municipales de seguridad. La reforma constitucional ya incluida en la carta magna señala que la Guardia

Nacional será de vigilancia y exige a gobiernos estatales y municipales dos cosas concretas: un reporte de su fuerza operativa y sus planes locales de seguridad y un avance presupuestal para el pago de los servicios de la Guardia. Ante las quejas de gobernadores, el presidente López Obrador ordenó borrar de la ley reglamentaria lo que mandata la Constitución: pago por uso de la Guardia.

Lo de menos es el dinero. La intención gubernamental era obligar a gobiernos estatales y municipales a presentar un reporte completo en no más de 180 días --seis meses-- sobre la situación de la seguridad (diagnóstico de bandas) y planes operativos. Pero las quejas de los gobernadores obligarán a la Guardia a dar su servicio gratis.

Lo de más es el hecho de que gobiernos estatales y municipales se deslindan de la inseguridad en sus plazas, casi siempre asociada a complicidades institucionales. Y el número de efectivos de la Guardia en las plazas *calientes* será menor a la necesidad de fuerza de seguridad, porque con toda razón la Guardia no va a querer incorporar a sus operativos a policías estatales y municipales no certificados ni revisados por las instancias locales, y peor cuando existe la sospecha de que las policías locales están al servicio de los *cárteles* de la delincuencia.

En este sentido, el modelo de seguridad pública del gobierno lopezobradorista ha sido modificado sobre la marcha, pero no para mejorarlo sino para ajustarlo a las exigencias estatales y municipales. Y lo que se detectó como el principal problema de la inseguridad --la complicidad local con el crimen organizado-- seguirá sin corregirse, dejándole toda la carga a la Guardia Nacional y a sus escasos efectivos en cada plaza. Lo grave radica en que la información que se publica es la de los saldos en choques físicos entre fuerzas de seguridad y delincuentes, pero teniendo en el fondo --como en el modelo de iceberg-- la mayor parte de la estructura criminal por debajo de lo que se ve.

En lugar de usar casos concretos como potenciador de una mejor organización de las fuerzas federales de seguridad y de obligar a las fuerzas locales a *limpiarse* de sospechas, la operatividad de la estrategia ha estado reduciendo su efectividad. En este tiempo, los *cárteles* han escalado su violencia: narcos, extorsionadores, *huachicoleros*, robos a la luz pública y luchas violentas por plazas.

Las cifras de aumento de los homicidios dolosos revelan el hecho de que las fuerzas federales de seguridad se han replegado en su persecución de *capos* y ha disminuido su intención de desarticular estructuras criminales. En el vacío entre se desmantelan los viejos cuerpos y se construyen los nuevos, varias organizaciones de delincuentes están casi de fiesta porque pueden actuar con un menor porcentaje de detenidos por las autoridades.

Lo que preocupa a ciertos sectores sociales activistas sería la interpretación de que la disminución de las actividades de seguridad es coyuntural o se buscará la paz bajándole la presión sobre los *cárteles* aunque se pague el costo de mayor violencia en las estadísticas.

Análisis Estratégico

Del *cochiner*o y los *cochinos*

El 30 de mayo de 2019 se recordarán 35 años del asesinato del periodista Manuel Buendía, columnista entonces del periódico *Excelsior*. Pero el dato es más profundo. Buendía fue asesinado después de publicar dos columnas sobre un desplegado periodístico de obispos del sur de la república que denunciaban la llegada a zonas campesinas de marihuaneros, los primeros *cárteles* formales.

Buendía había recopilado ya datos y nombres del involucramiento de funcionarios, policías, políticos, miembros del poder judicial y rangos bajos del ejército como aliados a los marihuaneros. Por lo tanto, su asesinato ha estado siempre vinculado al crimen organizado entonces naciente. Inclusive, el que fue director de la Federal de Seguridad de 1982 a 1985, la policía política del régimen, José Antonio Zorrilla Pérez, fue arrestado en 1989 y condenado a un cuarto de siglo de prisión por el asesinato del columnista.

Ahora que el presidente López Obrador reveló que en materia de seguridad le habían heredado un *cochiner*o, algunos investigadores han comenzado a consolidar el repaso del pasado para tratar de identificar a los *cochinos* del *cochiner*o. Y el asesinato de Buendía fue el primer asesinato político del crimen organizado y sus aliados del poder. Si Zorrilla Pérez en su cargo de jefe de la policía política de Gobernación quiso “callar” a un periodista, entonces el huevo de la serpiente de la relación narcos-poder estuvo en ese periodo de 1982-1985 en Gobernación, cuyo titular fue Manuel Bartlett Díaz.

Ahí, con la corrupción de la DFS y sus principales agentes, se profundizó la descomposición de la seguridad: la policía política había liquidado a la guerrilla disidente y ya no tenía delante ningún enemigo del Estado. La DFS, entonces, se dedicó primero a “cuidar” los traslados de droga a lo largo del país para que pudieran cruzar la frontera con los EE UU, y luego los comandantes participaron en los *cárteles*. La fusión se notó cuando atraparon al *capo* Rafael Caro Quintero, quien portaba una credencial oficial y legal de la DFS con su foto y otro nombre. El tráfico de credenciales no era posible, por lo delicado de la corporación y porque podía portar armas y tenían permisos para matar y no nada más en defensa propia, sin el conocimiento y autorización de los dos jefes reales de la corporación: el director general y el secretario de Gobernación.

El *cochiner*o de la DFS-*cárteles* estalló como gran conflicto diplomático con los EE. UU. el tercer mes de 1985: nar-

cos del *cártel* de Jalisco de Caro y Ernesto Fonseca Carrillo *Don Neto* secuestraron, torturaron y asesinaron al agente de la DEA Enrique Camarena Salazar y su cuerpo fue tirado en Michoacán. El gobierno de Reagan y su embajador John Gavin realizaron una de las más duras presiones políticas y diplomáticas sobre México y la DFS, al grado de que Gavin reveló que Zorrilla estaba al servicio del narco y además ya había pactado un convenio de inteligencia con el STASI comunista de Alemania Democrática. Zorrilla fue removido de la DFS y hecho candidato a diputado local por Hidalgo, pero las presiones llevaron a perder la posibilidad de fuero. Fue encarcelado en 1989.

Bartlett Díaz, como secretario de Gobernación y jefe directo de Zorrilla, hizo una fuga hacia adelante: disolvió la DFS y la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales y creó la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, el DISEN como antecedente del CISEN. Todos los viejos policías de la DFS fueron dispersados, aunque no sus relaciones con el narco.

Si los policías estaban al servicio del narco desde la Operación Cóndor de mediados de los setenta --sembrar droga en Sinaloa para llevarla a los soldados estadounidenses en Vietnam--, los jefes se pasaron al lado oscuro del narco al comenzar el gobierno de De la Madrid en diciembre de 1982. Ahí, en el periodo 1976 (llegada del agente de la DFS en el aeropuerto y por tanto jefe del flujo de droga por la terminal aérea, Arturo *El Negro* Durazo Moreno) a finales de 1988, el *cochiner*o de la seguridad por la complicidad Estado-narcos, se descompuso la política de seguridad interior del gobierno mexicano.

Las acusaciones del presidente López Obrador contra sus antecesores por el *cochiner*o que le dejaron son absolutamente ciertas, sólo que con el matiz de que los *cochinos* del *cochiner*o se salieron del PRI y encontraron refugio en Morena: sin pasar por ningún filtro de seguridad, Bartlett Díaz se pasó al PT por su alianza con Morena, se convirtió en asesor político de López Obrador y recibió el cargo de director de la Comisión Federal de Seguridad. Su pasado en Gobernación, el caso Zorrilla, el asesinato del columnista Buendía realizado por agentes de la DFS y el secuestro del agente de la DEA quedaron en el pasado político del sistema priísta y en la memoria de quienes vivieron esos tiempos convulsos.

En este sentido, la nueva fase del crimen organizado --de la guerra de Calderón en diciembre de 2006 a la fecha-- sigue mostrando el *modelo* de Gobernación-Bartlett del sexenio de De la Madrid: no puede haber crimen organizado a nivel municipal, estatal, federal e internacional si no es con la complicidad de autoridades de todos los niveles. Y han pasado casi 45 años desde los primeros casos hasta llegar a niveles superiores, pero sin que nadie haya iniciado una *limpia* y reorganización policiaca a partir de elementos que pueden conseguirse de complicidad de las autoridades con los delincuentes.

De ahí que el *cochiner*o debe ser limpiado a partir de los *cochinos* del pasado que están en la gran coalición de Morena.

Agendas, alertas, actores

- El intento de robo del automóvil del columnista **Héctor de Mauleón** y el saldo de un delincuente muerto, otro herido y un tercero escapado por la respuesta a balazos del chofer y escolta no dejó de ser impactante, más allá de la personalidad del afectado. Ocurrió en la Colonia Condesa, la que aparece infestada de criminales en columnas de **De Mauleón**. Es decir, ha habido denuncias públicas y una pasividad gubernamental. Y el hecho de que ocurriera a la hora de la comida indica que la delincuencia opera ya sin restricciones de hora, a sabiendas de que las calles de Ciudad de México están abandonadas por las polinias.
- Las cifras revelan que la delincuencia en Ciudad de México salió a las calles sin miedo a la policía, con datos que no se investigan. Un video que circula en redes mostró un secuestro en CDMX y detrás de los secuestradores iba una patrulla de la judicial local. Lo más espantoso del asunto fue que el policía declaró que tuvo miedo de intervenir y que mejor fue “siguiendo” a los delincuentes para saber su ruta, aunque no se tuvieron datos de que con su información se hubiera desmantelado alguna banda de secuestradores.
- Lo malo de todo es que Morena en CDMX tiene el aval a ciegas de su mayoría y los datos asaltos a plena luz del día no bajan popularidad de los gobernantes. La jefa de gobierno **Claudia Sheinbaum** no logra articular una estrategia de seguridad y está esperanzada que la Guardia Nacional y partidas especiales de la Policía Militar le ayuden a ahuyentar --que no arrestar-- a los delincuentes. Pero su policía no sólo no se respeta, sino que se le humilla golpeándola en el Metro.
- Otra crisis de seguridad se fermenta en la zona sur de CDMX: Ciudad Universitaria como plaza en disputa

por bandas de mercomendistas, a partir del hecho de que el consumo de droga en la población universitaria y zonas aledañas es un gran mercado para la venta de drogas. Balaceras, asesinatos, secuestros y agresiones se multiplican en CU y sus alrededores, con la respuesta evasiva de las autoridades en el sentido de que no se puede violar la autonomía universitaria. Eso sí, los delincuentes no sólo la violan día con día, sino que viven ya en refugios dentro de CU y en departamentos cercanos.

- Mientras más se insiste en las conferencias presidenciales mañaneras que el *huachicoleo* está controlado, más se tienen evidencias de que las bandas están atomizadas y funcionan con autonomía relativa de algún *cartel* que pueda jefaturarlas. Guanajuato, Veracruz, Estado de México y Puebla y ahora se suma Tabasco. El problema es que no se trata estrictamente de un *cártel* organizado, sino de bandas desorganizadas que tiene la complicidad de la sociedad alrededor de los ductos perforados porque vía esa sociedad se vende la gasolina robada.
- La meta de bajar 50% de cifras de inseguridad en el 2024 que contiene el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de López Obrador es audaz, carece de racionalidad y es más un compromiso que una meta certificada. De otro lado, fue buena señal que el PND aventurara metas concretas, porque esos documentos suelen ser sólo directrices nebulosas.
- El asesinato de dirigentes de ambulantes en Morelos dejó una mala señal: el alquiler de sicarios para asesinatos bajo contrato, una escala inferior en la delincuencia. Y desde luego, habla de la ruptura del tejido social en una entidad que ha sido botín de políticos vinculados al crimen organizado.

Directorio

Mtro. Carlos Ramírez
Presidente y Director General
carlosramirez@botmail.com

Lic. José Luis Rojas
Coordinador General Editorial
joselrojas@botmail.com

Mtro. Carlos Loeza Manzanero
Coordinador de Análisis Económico

Mauricio Montes de Oca
Relaciones Institucionales y ventas
seguridadestrategicamx@gmail.com

LDG. Marco Antonio Clemente
Diseño

Lic. Armando Reyes Viguera
Director editorial
armando.reyesviguera@gmail.com

Dr. Rafael Abascal y Macías
Coordinador de Análisis Político

Armando López
Redacción

Raúl Urbina
Documentación, archivo.
raulzpress82@gmail.com

Ana Karina Sánchez López
Coordinadora de la Presidencia
anakarinas108@gmail.com

Zona Zero, publicación quincenal del Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad. Es una publicación de Seguridad y Defensa.

Editor responsable: Carlos Javier Ramírez Hernández. Todos los artículos son de responsabilidad de sus autores. Oficinas: Cerro Tuera 49, Col. Oxtopolco Universidad, C. P. 04318, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, México.
seguridadydefensa.mx



SUSCRÍBASE A ZONA ZERO

49 ejemplares al año, todos los lunes

Recíbalos:

- Ejemplar impreso enviado por mensajero los viernes.
- Consulta de archivos vía web.
- Consulta a editores y redactores en preguntas por escrito.
- Colección anual de 49 ejemplares en carpeta especial.
- Suscripción anual 4 mil 500 pesos en República Mexicana
- Y 250 dólares al extranjero.
- Suscripciones vía seguridadydefensa.mx
- Más información en seguridadydefensa.mx
- Y con Mauricio Montes de Oca: 55-7670-4102 y 6264-0054, seguridadestrategicamx@gmail.com